

Bogotá D.C. (Colombia), 26 de enero de 2021.

A la atención de:

Philippe TEXIER,
Presidente de la 48 sesión del
Tribunal Permanente de los
Pueblos.

Objeto: ANEXO. Presentación de los cargos y motivos por los Fiscales del TPP
Referencias: Acusación de crímenes de exterminio, genocidio político e impunidad en contra del estado colombiano.

2. PRESENTACIÓN DE LA ACUSACIÓN

Estos hechos que se describirán permiten determinar una línea continua de violación en el fenómeno de prácticas de aniquilamiento, exterminio y/o genocidio político, así como impunidad. Estos supuestos fácticos se fundamentan en las investigaciones que han sido recogidas en documentos que se han presentado a este Tribunal, y que han mencionado varios representantes de las organizaciones sociales, sindicales y políticas del país a lo largo de esta sesión de este. Así como en informes y sentencias de fondo de la Justicia regional.

Estos casos hasta ahora NO SE HAN ESCLARECIDO (en Colombia), ni se ha optado por INVESTIGAR exhaustivamente O SANCIONAR a todos los responsables de estos delitos como corresponde: **en crímenes internacionales.**

HECHOS RELEVANTES

2.1. El caso de las bananeras es evidente que todo estuvo bajo el conocimiento previo de lo que resultó siendo en 1928 un genocidio político así:

“Ante el peso que adquiría la autoridad de Cortes Vargas y del ejército, el Gobernador sostuvo que en la región se había consolidado un poder independiente, separado del poder civil. Esta consideración de quien en teoría era la primera autoridad del Departamento encolerizó al Comandante Militar de la Plaza de Santa

Marta, que demandaba a Bogotá la concesión de amplios poderes, porque las autoridades civiles no actuaban diligentemente en cuanto a las investigaciones y la captura de los comunistas y subversivos que les enviaba el ejército¹

“Con el tácito apoyo del gobierno central y respaldado por el Ministerio de Guerra, el ejército se convirtió en el principal aliado de la compañía, la que ofrecía continuos homenajes y fiestas a los jefes militares. El ejército fue el principal soporte del esquirolaje, convirtiéndose en fuerza de trabajo que reemplazaba a los huelguistas en paro, o intimidando a los obreros para obligarlos a trabajar: Durante la huelga nosotros los maquinistas llevábamos un soldado a cada lado de la locomotora. Si alguna vez teníamos que bajarnos, ellos iban con nosotros a donde fuera, dizque porque íbamos a entregarles información o mensajes a los huelguistas. Y si alguien trataba de bajar solo, entonces le daban plomo. Para comer tenía que ser en grupo. Salíamos de la máquina al comedor y del comedor a la máquina. Siempre los soldados apuntaban sus fusiles hacia nosotros, que éramos prácticamente prisioneros. En el tren blindado iban muchos más soldados con metralletas y disparaban contra todo lo que se moviera. Si era una persona, un burro, o una vaca daba lo mismo. Ahí quedaba muerto. Y el tren seguía su marcha². El gerente T. Bradshaw afirmaba que estaba en marcha "un movimiento claro y absolutamente subversivo, un motín o asonada, una insinuación del levantamiento de las masas en la zona bananera, un movimiento, en fin, que están dentro de los que caen bajo la sanción del Código Penal y bajo el refreno de las autoridades"³

Posterior a esto viene el ataque y los muertos en cuantía superior a diez y varios heridos el 5 y 6 de diciembre de 1928. Así como la persecución de los trabajadores de ese sector.

2.2. En el caso de Santa Bárbara podemos ver cómo el origen del genocidio que respondía a estas mismas políticas y se materializó a través de lo que se registra documentalmente y Vega Cantor⁴ menciona:

“Tras quedar paralizado totalmente el transporte de materia prima para la fábrica de cementos Argos, el 22 de febrero el Gobernador del Departamento, Fernando Gómez Martínez, dio a conocer la determinación de transportar cemento y clinker, tal y como lo relató Pastor Pérez, quien se desempeñaba como presidente de la FEDETA: El viernes 22 ya era pública la determinación de la gobernación de Antioquía, de traer cemento y clinker de El Cairo a Medellín, “costare lo que costare”. Esta determinación –según lo expresó posteriormente el secretario de gobierno, doctor Germán Vélez- conllevaba la “defensa del principio de autoridad”, o “lo

¹ AGN, FMG, S. 1, T. 982, f.77 citado por Renán Vega Cantor. Sindicalicidio P.2

² Citado por René Vega Cantor, p. 3 Sindicalicidio documento citado.

³ Citado en Gabriel Fonnegra Gabriel Fonnegra, La bananera. Un testimonio vivo, Círculo de Lectores, Bogotá, 1986. 15. El Tiempo, noviembre 21 de 1928, p. 7.

⁴ Citado por René Vega Cantor Sindicalicidio. Pastor Pérez, “La Denuncia Criminal”, La Nueva Prensa, No. 92, 2 -15 de marzo de 1963, p. 44 (documento citado).

escrito, escrito está”. Se decía en la gobernación que esa Resolución contaba con el respaldo de los ministros y con la autorización de la Inspección del Trabajo de Medellín”.

El resultado: murieron por disparos del Ejército, varias personas, y más de 40 heridas entre esos María Edilma Zapata, Rafael González, Pastor Cardona, Luis Ángel Holguín, Israel Antonio Vélez, Juan María Holguín, Rubén De Jesús Pérez, Joaquín Emilio Román, José de Jesús Suaza, Luis Esteban Serna, Luis Ángel Ruiz Villada. Y quedaron heridos más de 40 personas.

2.3. Exterminio de etnias: De igual manera los grupos étnicos han sido exterminados como puede verse en el caso de los Bari que desde que se expidió en 1931 la Ley 80, por medio de la cual se aprobó el contrato para explotación petrolera en su territorio y se ordenó a la Fuerza Pública repeler a los indígenas que impidieran la actividad petrolera de exploración y explotación.

Así mismo, muchos factores posteriores y disposiciones como lo fue en 1959 con la aprobación de la Ley Forestal generaron también un ataque directo al derecho Humano de esta etnia reduciendo su hábitat, y por lo tanto también afectando la estabilidad del ambiente, y afectando desde entonces su modo de vida, que ha llevado a su exterminio.

Pero también por considerarlos parte de grupos subversivos.

2.4. Eliminación de sindicalistas

Se calcula que más 100 trabajadores de petróleos vinculados a la Uso han sido objetivo de estas prácticas.

Es claro que INCLUSO en varias declaraciones que se han vertido en procesos judiciales se pone en evidencia cómo fue la maquinaria de articulación, aniquilamiento, y actuación del grupo paramilitar con vinculación de instituciones estatales.

La existencia de un conflicto armado interno (CANI) ha generado también políticas de exterminio que deben analizarse a manera de contexto.

El paramilitarismo es un fenómeno que se desplazó a muchos departamentos para ejercer políticas de exterminio, genocidio, desaparición y muerte de sindicalistas, pero también de personas que SE constituyeron como objetivo militar y que calificaban como miembros del partido comunista. El Magdalena Medio, Urabá, el Alto Ariari, el Noreste Antioqueño, Atlántico, el Meta y otros departamentos son claros ejemplos de esta violencia.

Los grupos que han sido perseguidos pueden ser clasificados como sindicalistas, movimientos Políticos, movimientos estudiantiles y grupos étnicos y raciales.

Es fundamental ver que en esta línea de tiempo el factor fundamental de persecución lo ha generado lo que quizás expresó el: "Sindicato Central Obrero emitió un comunicado donde señalaba que "en estos momentos de expectación y de tristeza, cuando de manera oficial se declara la existencia del anarquismo y del bolchevismo (sic) para desvirtuar la organización obrera, cuyo desarrollo es incontenible, precisa hacer conocer del público las bases de dicha organización, su objetivo y los hechos que la Historia deberá recoger con imparcialidades y sin inexactitudes"⁵.

Igualmente hay que decir como lo menciona Renán Vega Cantor⁶:

"La Unión Sindical Obrera (USO) es una organización que agrupa a los trabajadores petroleros, fue fundada en 1923 y ha realizado importantes luchas por la defensa y nacionalización de los hidrocarburos en Colombia. Junto con trabajadores de otros sectores (bananeros, palmeros, carboneros), los petroleros, agrupados en la USO, han sido blanco de una sistemática campaña de persecución y asesinatos. La sede principal de la USO se encuentra en la ciudad de Barrancabermeja, en el Magdalena Medio".

El Magdalena Medio como lo han demostrado las sentencias de Justicia y Paz, ha sido un territorio desde hace muchos años cooptado por fuerzas paramilitares.

El Magdalena Medio como lo han demostrado las sentencias de Justicia y Paz, ha sido un territorio desde hace muchos años cooptado por fuerzas paramilitares.

Es claro que estos grupos paramilitares aliados con sectores del Estado declararon "objetivo militar" a los que consideraran la "otredad negativa"⁷, pero también a los que le solicitaban organismos del Estado.

2.5. Gaitanismo y otros grupos políticos.

El gaitanismo y el asesinato de Gaitán permite partir de conocer que: "El propósito de Gaitán era la instauración de un nuevo sistema político y su candidatura no se inscribía explícitamente como candidatura liberal sino como candidatura del pueblo, llamando al pueblo conservador a conformar un solo frente con el pueblo liberal, socialista, comunista y sin partido, lanzó una de las consignas de su campaña: "contra la falsa unión de la oligarquía liberal y conservadora nosotros proponemos el abrazo de la gente olvidada de Colombia"... Para febrero del año 1948 el triunfo de Gaitán era incontenible. Había organizado un movimiento disciplinado, con lo cual logró que, gente proveniente de todo el país, llenara y desbordara la Plaza de Bolívar, en lo que se denominó la Manifestación del Silencio, donde pronunció la

⁵ Manifiesto del Sindicato Central Obrero a los artesanos de la República", en La Libertad, abril 3 de 1919. Citado por Renán Vega Cantor en el documento denominado genocidio en Colombia capítulo genocidio Laboral.

⁶ Documento denominado Genocidio en Colombia Sindicalicidio para el TPP.

⁷ Daniel Feierstein. Seis estudios sobre el genocidio. Análisis de las relaciones sociales, otredad, exclusión y exterminio, Buenos Aires: Eudeba, 2000, 133 p.

llamada "Oración por la Paz", en la que responsabilizó al gobierno del derramamiento de sangre. Así dirá dirigiéndose al presidente Ospina: "Os pedimos que cese la persecución de las autoridades; así os lo pide esta inmensa muchedumbre. Os pedimos una pequeña y grande cosa: que las luchas políticas se desarrollen por los cauces de la constitucionalidad".⁸

Ya se denunciaba el hostigamiento de las autoridades y posteriormente asesinaron a Gaitán.

2.6. UP y otros

Del mismo modo debemos afirmar que con el exterminio de la Up y de otros grupos que se sometieron a los procesos de paz, se da claramente una política de aniquilación. Confesada por los grupos paramilitares^{9, 10}

"1560. Al respecto, la Comisión recuerda que fueron múltiples las ocasiones en las que líderes de la Unión Patriótica pusieron en conocimiento de altas autoridades del Estado las amenazas de las cuales eran víctima; además, observa que la prensa nacional y regional documentó constantemente los hechos de violencia en contra de integrantes y militantes de la UP. La Comisión también observa que en varios de los "casos representativos", antes de las muertes de las víctimas se presentaron denuncias ante las autoridades estatales que involucraban a agentes estatales. Muestra de ello son las denuncias presentadas por los líderes de la UP Jaime Pardo Leal y Pedro Nel Jiménez, en agosto de 1986; la declaración que rindió el señor Jaime Pardo Leal, el 2 de junio de 1987, ante el Procurador Delegado para las Fuerzas Militares; las comunicaciones de Ricardo Toscano, director regional del Partido Comunista Colombiano en el Meta, en las que expresaba su preocupación al Gobernador por los crímenes cometidos contra miembros de la UP, como Carlos Kovacs, y por los hostigamientos del Ejército y la Policía; la denuncia de la Dirección Nacional de la UP, del 19 de enero de 1989, ante el Procurador General de la Nación por las amenazas contra Bernardo Jaramillo y José Antequera; las reuniones de líderes de la UP del Meta, en las que expusieron a los Ministros de Gobierno y de Defensa, las acciones de grupos paramilitares contra miembros de su partido en las que estarían involucradas miembros de la Fuerza Pública; las denuncias de líderes de la UP contra el actuar de la Brigada 12 del Ejército del Caquetá, como consta en el caso de la señora Rosalba Gavilar Novoa. 1561. La Comisión encuentra que las autoridades del Estado no demostraron haber explorado debidamente las líneas de investigación que involucraban a grupos paramilitares y agentes del Estado en el accionar violento y organizado que tuvo lugar contra los integrantes y militantes de la Unión Patriótica. Además, de los resultados obtenidos en las investigaciones

⁸ Gloria Gaitán. Genocidio y Memoricidio. Documento para el Tribunal, p. 5

⁹ Sentencia contra Hebert Veloza

¹⁰ Informe 170/17 de CIDH.

actualmente existentes, tampoco se observa que se hayan analizado exhaustivamente dichas líneas, porque no se ha logrado determinar si, desde una visión que aborde en su totalidad el fenómeno de la violencia contra la UP, las afirmaciones sobre la participación de tales sujetos (es decir, paramilitares y agentes del Estado) eran infundadas o ciertas. Además, la Comisión no observa diligencia del Estado en el trámite de los procesos sancionatorios contra agentes estatales. El incumplimiento prolongado del deber de investigar exhaustivamente las líneas de investigación que permitan entender dicho fenómeno de violencia se ve reflejado incluso en la propia posición del Estado colombiano en su escrito de 6 de septiembre de 2017, en el que continuó sosteniendo que las causas de lo sucedido a la Unión Patriótica tienen múltiples interpretaciones posibles... 1563. En el mismo sentido, la Comisión considera que el Estado no adelantó acciones dirigidas a desentrañar las estructuras criminales que participaron en los hechos de violencia contra integrantes y militantes de la Unión Patriótica. Teniendo en cuenta la magnitud del caso concreto, que involucra alrededor de 6000 víctimas, que se desarrolló en varias regiones del país, durante un extenso período de tiempo y que involucró a diferentes actores como congresistas, diputados, concejales, dirigentes y militantes de un partido político, la CIDH observa que resultaba obvia la existencia de una estructura criminal organizada detrás de tales hechos de violencia. No obstante, encuentra que el Estado no investigó el fenómeno comprensivamente para identificar a los autores criminales, los móviles, los intereses que tenían, así como las conexiones que tenían con otras fuerzas legales o ilegales.¹¹

2.7. ELEMENTOS NORMATIVOS DE LA CONDUCTA DE GENOCIDIO POLÍTICO

2.7.1. Ha sido una práctica que se ha realizado por acción y connivencia del Estado colombiano con otros grupos absolutistas

2.7.2. Política que fue conocida por el Estado y que, a pesar de ello, los integrantes fueron aniquilados uno a uno.

2.7.3. En todos estos casos se ha ocultado por tanto a los victimarios, se ha generado protección a ciertos niveles, y por lo tanto se ha seguido en impunidad respecto de crímenes de lesa humanidad, que ni siquiera han sido considerados de esa manera por el Estado colombiano.

2.7.4. Esto basta para demostrar de manera inicial que existía conocimiento, voluntad del Estado en ocasionar este resultado.

¹¹ Sentencia caso Isaza Uribe CIDH

2.7.5. Que fueron claramente políticas de exterminio desde el principio hasta el final.

2.7.6. Que se realizaron acciones tendientes a llevar a cabo ese resultado y que nada hizo el propio Estado para evitar el genocidio de cada uno de estos grupos.

2.7.8. Si bien es cierto se han proferido sentencias judiciales contra HH Veloza García en el tema de la participación en el exterminio de la UP, en donde se afirma por los magistrados que existe una especial circunstancia en las víctimas: "ser parte del movimiento sindical y del partido de la UP" para ser asesinadas, no existen investigaciones sobre todos los autores de ese genocidio, ni sobre la responsabilidad del Estado.

2.7.9. Refiriéndonos a los casos que hemos mencionado en el punto número dos¹² del documento principal podemos afirmar que las políticas de genocidio surgen evidentes y sin interrupción desde 1924.

2.7.10. Muchos son los fenómenos que surgen dentro de este genocidio que permiten transversalizar el crimen.

2.7.11. Hay, por lo tanto, un factor común: la consideración de pertenecer a un grupo o ideología. El etiquetamiento es pues característica de este fenómeno social de persecución, y de exterminio.

2.7.12. Muchos de los fenómenos sociales han sido negados y no han querido ser reconocidos por el Estado, lo que incide en la negativa de investigación.

2.8. Conocimiento, intención y voluntad.

Las pruebas que se presentan y se desahogarán en el desarrollo de este Tribunal permitirán demostrar que cada uno de estos hechos está documentado.

La persecución es histórica e incluso muchas de las investigaciones han permitido obtener por lo menos declaraciones o elementos que así lo evidencian, en donde una de las causas fundamentales en todos estos casos el factor de persecución y exterminio es la ideología.

Sin embargo, la impunidad ha reinado.

¹² Movimiento Gaitanista 19, Partido Comunista, Unión Patriótica, FARC, A luchar, M-19, Marcha Patriótica, Frente Popular, UNO, Colombia Humana, CUT, USO, SINALTRAINAL, Universidad del Atlántico, Universidad de Antioquia, Indígenas, Afrodescendientes, Campesinado, Movimiento Cívico del Oriente Antioqueño, Comunidades Eclesiales de Base, Masacre de las Bananeras y Santa Bárbara, Repúblicas Independientes, San José de Apartadó, Movimiento Nacional Carcelario.

En muchos de estos casos el Estado se ha aliado con actores como los paramilitares para ejecutar esas políticas.

En otros tantos, el estado ha utilizado aparatos organizados de poder (instituciones) para ejecutarlos.

Estas fuerzas paramilitares han confesado por los mismos cabecillas que han realizaron asesinatos, desplazamientos, tortura, ataques y amenazas.

La posición de garante obliga al estado a: prevenir, evitar, revocar e implementar medidas de salvamento, que nunca fueron activadas por el Estado a pesar del conocimiento previo.

2.9. PRUEBAS.

Se ofrecen como pruebas documentales las citadas parcialmente dentro de este escrito realizadas por diversas personas y por las organizaciones concurrentes a este Tribunal. De igual manera los informes de fondo y las sentencias de la CIDH:

- Informe de fondo 170/2017.
- Sentencia Caso Isaza Uribe y otros vs Colombia del 20 de noviembre de 2018.

2.10. PETICIÓN

Por todas estas razones solicitamos se admita a investigación y juzgamiento los hechos mencionados y se decida con base en los principios internacionales, la sanción que permita restituir cabalmente los derechos de las víctimas, vulnerados de manera histórica: en el pasado, en el presente y en el futuro, y se genere un precedente fundamental para que el Estado colombiano sea consciente de estos patrones de exterminio y tome medidas para evitar que continúen y para restablecer a las víctimas integralmente, interpelando las conciencias de los gobiernos de turno.

Fiscalía para el TPP


IVÁN VELÁSQUEZ


ANGELA MARÍA BUITRAGO RUIZ

Bogota D.C. (Colombie), le 26 janvier 2021.

A l'attention de :

Philippe TEXIER,
Président de la 48^{ème} session du
Tribunal Permanent des Peuples.

Objet : ANNEXE. Présentation des accusations et des motifs par les Procureurs du Tribunal Permanent des Peuples

Références : Accusation de crimes d'extermination, de génocide politique et d'impunité à l'encontre de l'État Colombien.

2. PRÉSENTATION DE L'ACCUSATION.

Les faits qui seront décrits nous permettent de déterminer une ligne continue de violation par des pratiques d'annihilation, d'extermination et/ou de génocide politique.

Ces hypothèses factuelles sont basées sur les enquêtes qui ont été recueillies dans les documents qui ont été présentés à ce Tribunal, et mentionnés par divers représentants d'organisations sociales, syndicales et politiques, tout au long de cette session.

Jusqu'à présent, ces affaires n'ont PAS été CLARIFIÉES, et il n'a pas été décidé D'ENQUETER de manière approfondie ; ni de PUNIR tous les responsables de ces délits qui peuvent être qualifiés : **de crimes internationaux.**

FAITS PERTINENTS

2.1. Dans le cas des plantations de bananes :

Il est évident que tout était sous la connaissance préalable de ce qui s'est avéré être un génocide politique en 1928 :

« Face au poids que l'autorité acquise de Cortes Vargas et de l'armée, le Gouverneur a soutenu que dans la région, un pouvoir indépendant, distinct du pouvoir civil, avait été consolidé. Cette considération de celui qui, en théorie, était la première autorité du département, a irrité le commandant militaire de la Place de Santa Marta, qui a exigé que Bogota lui accorde de larges pouvoirs, car les autorités civiles n'ont pas agi avec diligence dans les enquêtes et la capture des communistes et des subversifs qui leur ont été envoyés par l'armée¹ ».

« Avec l'appui tacite du gouvernement central et soutenu par le ministère de la Guerre, l'armée est devenue le principal allié de l'emprise privée, qui a offert des tributs et des réceptions continues aux chefs militaires. L'armée était le principal torpilleur de la grève, devenant une force de travail qui remplaçait les grévistes, ou intimidant les ouvriers pour les forcer à travailler : *« pendant la grève, nous, les machinistes, nous transportions un soldat de chaque côté de la locomotive. Si jamais nous devons descendre, ils nous accompagneraient partout où nous allions, soi-disant parce que nous allions livrer des informations ou des messages aux grévistes. Et si quelqu'un essayait de partir seul, ils lui tiraient dessus. Pour manger, il fallait être en groupe. Nous allions de la machine à la salle à manger et de la salle à manger à la machine². Les soldats pointaient toujours leurs fusils sur nous, nous étions pratiquement prisonniers. Dans le train blindé, il y avait beaucoup de soldats avec des mitrailleuses et ils tiraient sur tout ce qui bougeait. Que ce soit une personne, un âne ou une vache, cela n'avait pas d'importance. Il était mort. Et le train continuait sa marche ».*

Le directeur T. Bradshaw a affirmé qu'un mouvement clair et absolument subversif était en cours, une émeute ou un soulèvement, une insinuation d'un soulèvement des masses dans la zone bananière, un mouvement, en bref, qui tombe sous la sanction du code pénal et sous la contrainte des autorités ».

Puis, les 5 et 6 décembre 1928, il y eut l'attaque et la mort de plus de dix personnes et plusieurs blessés, ainsi que la persécution des travailleurs de ce secteur³.

¹ . AGN, FMG, S. 1, T. 982, f.77 cité par Renán Vega Cantor. *Sindicalicidio* P.2

² Cité par René Vega Cantor, p. 3 Document du *Sindicalicidio* cité.

³ Cité par René Vega Cantor, p. 3 Document du *Sindicalicidio* cité.

2.2. Dans le cas de Santa Bárbara :

Nous pouvons voir comment l'origine du génocide qui a répondu à ces mêmes politiques, s'est matérialisé à travers ce qui est consigné dans les documents et les évocations de Vega Cantor⁴ :

« Après la paralysie totale du transport des matières premières de la cimenterie d'Argos, le 22 février, le gouverneur du département, Fernando Gómez Martínez, a fait part de sa détermination à transporter le ciment et le clinker, comme l'a rapporté Pastor Pérez, président de FEDETA : "Le vendredi 22, la détermination du gouverneur d'Antioquia à faire transporter le ciment et le clinker du Cairo à Medellín, "au prix de ce qu'il coûterait", était déjà publique. Cette détermination, telle qu'exprimée plus tard par le secrétaire du gouvernement, le Dr Germán Vélez, impliquait la "défense du principe d'autorité", ou "ce qui est écrit est écrit". Il a été dit dans le bureau du gouverneur que cette résolution avait le soutien des ministres et l'autorisation de l'inspection du travail de Medellín ».

Résultat : plusieurs personnes ont été abattues par l'armée et il y eut plus de 40 blessés, parmi lesquels María Edilma Zapata, Rafael González, Pastor Cardona, Luis Ángel Holguín, Israel Antonio Vélez, Juan María Holguín, Rubén De Jesús Pérez, Joaquín Emilio Román, José de Jesús Suaza, Luis Esteban Serna, Luis Ángel Ruiz Villada. Plus de 40 personnes furent touchées.

2.3. Extermination de groupes ethniques :

De la même manière, des groupes ethniques ont été exterminés, comme on peut le voir dans le cas des Bari, qui depuis la loi 80 adoptée en 1931, autorise le contrat d'exploitation pétrolière sur leur territoire a été approuvé et donne l'ordre aux Forces Publiques de repousser les indigènes qui empêchaient les activités d'exploration et d'exploitation pétrolière.

De même, de nombreux facteurs et dispositions postérieurs, comme en 1959 avec l'approbation de la loi forestière, ont également généré une attaque directe contre les Droits de l'Homme de ce groupe ethnique, en réduisant leur habitat, et donc affectant également la stabilité de l'environnement, affectant leur mode de vie, ce qui a conduit à leur extermination.

Mais également pour les avoir considérés comme faisant partie de groupes subversifs.

2.4. Élimination des syndicalistes :

⁴ Cité par René Vega Cantor *Sindicalidicio. Pastor Pérez, "La Denuncia Criminal", La Nueva Prensa, n° 92, 2-15 mars 1963, p. 44 (document cité).*

On estime que plus de 100 travailleurs du pétrole liés à USO ont été la cible de ces pratiques.

Il est clair que MÊME dans plusieurs déclarations qui ont été faites dans le cadre de procédures judiciaires, il est mis en évidence le mécanisme d'articulation, d'annihilation et d'action du groupe paramilitaire ayant des liens avec les institutions de l'État.

L'existence d'un conflit armé interne (CANI) a également généré des politiques d'extermination qui doivent être analysées dans leur contexte.

Le paramilitarisme est un phénomène qui s'est déplacé dans de nombreux départements pour mener des politiques d'extermination, de génocide, de disparition et de mort de syndicalistes, mais aussi ces personnes SE convertirent comme des objectifs militaires qualifiées de membres du Parti Communiste. Magdalena Medio, Urabá, Alto Ariari, Northeastern Antioquia, Atlántico, Meta et d'autres départements sont des exemples clairs de cette violence.

Les groupes qui ont été persécutés peuvent être classés en tant que syndicalistes, mouvements politiques, mouvements étudiants et groupes ethniques et raciaux.

Il est fondamental de voir que dans cette ligne de temps, le facteur essentiel de persécution a été généré par ce qui a été exprimé par : "La Centrale syndicale des travailleurs a publié un communiqué dans lequel elle a souligné que *"dans ces moments d'attente et de tristesse, lorsque de manière officielle l'existence de l'anarchisme et du bolchevisme (sic) est déclarée pour fausser l'organisation des travailleurs, dont le développement est imparable, il est nécessaire de faire connaître au public les bases de cette organisation, son objectif et les faits que l'Histoire doit recueillir avec impartialité et sans inexactitudes⁵".*

De même, comme le mentionne Renan Vega Cantor⁶ :

« L'Union Syndicale Ouvrière (USO) est une organisation qui regroupe les travailleurs du pétrole. Fondée en 1923, elle a mené d'importantes luttes pour la défense et la nationalisation des hydrocarbures en Colombie. Avec les travailleurs d'autres secteurs (bananiers, ouvriers des palmerais et charbonniers), les travailleurs du secteur pétrolier, regroupés au sein de l'USO, ont été la cible d'une campagne systématique de persécution et d'assassinats ».

Le siège principal de l'USO se trouve dans la ville de Barrancabermeja, dans le Magdalena Medio".

⁵ *Manifiesto del Sindicato Central Obrero a los artesanos de la República*", dans *La Libertad*, 3 avril 1919. Cité par Renán Vega Cantor dans le document intitulé *Genocidio en Colombia capítulo genocidio Laboral*

⁶. Document intitulé *Genocidio en Colombia Sindicalicidio para el TPP* cit.

Le Magdalena Medio, comme l'ont montré les sentences de Justice et Paix, est un territoire coopté par diverses forces paramilitaires depuis de nombreuses années.

Il est clair que ces groupes paramilitaires, alliés à des secteurs de l'État, ont déclaré comme "objectifs militaires" ceux qu'ils considéraient comme une "altération négative"⁷, mais également ceux qui sollicitaient les organismes d'État.

2.5. « Gaitanisme » et autres groupes politiques.

Le gaitanisme et l'assassinat de Gaitan nous permet de savoir que : "Le but de Gaitan était l'établissement d'un nouveau système politique et sa candidature n'a pas été explicitement enregistrée comme une candidature libérale mais comme une candidature du peuple, appelant le peuple conservateur à former un front unique avec le peuple libéral, socialiste, communiste et sans parti. Un des slogans lancé dans sa campagne était : "contre la fausse union de l'oligarchie libérale et conservatrice, nous, nous proposons l'étreinte du peuple oublié de Colombie"... En février 1948, le triomphe de Gaitan est incontrôlable. Il avait organisé un mouvement discipliné, avec lequel il a réussi à faire venir des gens de tout le pays pour remplir et remplir la Plaza de Bolivar, dans ce qu'on a appelé la manifestation du silence, où il a prononcé la soi-disant "Prière pour la paix", dans laquelle il a blâmé le gouvernement pour l'effusion de sang. Il a déclaré au Président Ospina : "*Nous vous demandons de cesser la persécution par les autorités ; c'est ce que cette immense foule vous demande. Nous vous demandons une petite et une grande chose : que les luttes politiques soient menées par les canaux de la constitutionnalité*"⁸.

Ce harcèlement des autorités était déjà dénoncé et par la suite, Gaitán a été assassiné.

2.6. UP et autres :

De même, nous devons affirmer qu'avec l'extermination de l'UP et des autres groupes qui se sont soumis aux processus de paix, il y a clairement une politique d'anéantissement, confessée par les groupes paramilitaires^{9,10}

1560. A cet égard, la Commission rappelle que des dirigeants de l'Union patriotique ont porté à plusieurs reprises l'attention des hautes autorités de l'Etat dont ils étaient victimes; En outre, il observe que la presse nationale et régionale a constamment documenté des actes de violence contre des membres et des militants de l'UP. La Commission observe également que dans plusieurs des «cas représentatifs», avant le décès des victimes, des plaintes ont été déposées auprès des autorités de l'État impliquant des agents de l'État. Preuve en est les plaintes présentées par les dirigeants de l'UP Jaime Pardo Leal et Pedro Nel Jiménez, en août 1986; la

⁷ Daniel Feierstein. *Six études sur le génocide. Análisis de las relaciones sociales, otredad, exclusión y exterminio*, Buenos Aires : Eudeba, 2000, 133 p

⁸ Gloria Gaitan. *Génocide et Mémoricide. Document pour le Tribunal*, p. 5

⁹ Sentence Herbert Veloza HH.

¹⁰ Rapport de fond 170/2017 CIDH.

déclaration faite par M. Jaime Pardo Leal, le 2 juin 1987, devant le procureur délégué aux forces militaires; les communications de Ricardo Toscano, directeur régional du Parti communiste colombien à Meta, dans lesquelles il a exprimé sa préoccupation au gouverneur pour les crimes commis contre des membres de l'UP, tels que Carlos Kovacs, et pour le harcèlement de l'armée et de la police;

la plainte de la Direction nationale de l'UP, datée du 19 janvier 1989, devant le procureur général de la Nation pour les menaces contre Bernardo Jaramillo et José Antequera; les réunions des dirigeants de l'UP du Meta, au cours desquelles ils ont exposé aux ministres du Gouvernement et de la Défense, les actions des groupes paramilitaires contre des membres de leur parti dans lesquelles des membres de la Force publique étaient impliqués; les plaintes des dirigeants de l'UP contre les actions de la 12e brigade de l'armée de Caquetá, telles qu'elles ont été enregistrées dans le cas de Mme Rosalba Gavilar Novoa. 1561. La Commission constate que les autorités de l'État n'ont pas démontré qu'elles avaient correctement exploré les pistes d'enquête qui impliquaient des groupes paramilitaires et des agents de l'État dans les actions violentes et organisées qui ont eu lieu contre les membres et les militants de l'Union patriotique.

En outre, à partir des résultats obtenus dans les enquêtes actuellement en cours, il n'est pas observé que ces lignes ont été analysées de manière exhaustive, car il n'a pas été possible de déterminer si, dans une perspective qui aborde pleinement le phénomène de la violence contre l'UP, les déclarations concernant la participation de ces sujets (c'est-à-dire des paramilitaires et des agents de l'État) étaient infondés ou vrais. En outre, la Commission n'observe pas la diligence de l'État dans le traitement des procédures de sanction contre les agents de l'État. Le manquement prolongé à l'obligation d'enquêter de manière exhaustive sur les pistes d'enquête permettant de comprendre ledit phénomène de violence se reflète même dans la position de l'État colombien dans son mémoire du 6 septembre 2017, dans lequel il continuait à soutenir que les causes de ce arrivé à l'Union patriotique ont de multiples interprétations possibles ...

1563. Dans le même sens, la Commission considère que l'État n'a pas mené d'actions visant à démanteler les structures criminelles ayant participé aux actes de violence contre les membres et militants de l'Union patriotique. Compte tenu de l'ampleur du cas spécifique, qui concerne environ 6000 victimes, qui a eu lieu dans diverses régions du pays, sur une longue période et qui a impliqué différents acteurs tels que des parlementaires, des députés, des conseillers, des dirigeants et des membres d'un parti politiquement, la CIDH observe que l'existence d'une structure criminelle organisée derrière de tels actes de violence était évidente. Cependant, il constate que l'État n'a pas mené d'enquête approfondie sur le phénomène pour identifier les auteurs de crimes, les motifs, les intérêts qu'ils avaient, ainsi que les liens qu'ils entretenaient avec d'autres forces légales ou illégales.¹¹

¹¹ Sentens Isaza Uribe y otros CIDH 1560-1563

2.7. Les éléments normatifs de la conduite du génocide politique :

2.7.1 Il s'agit d'une pratique qui a été réalisée par l'action et la connivence de l'État colombien avec d'autres groupes absolutistes.

2.7.2. Politique connue de l'État et dont les membres ont, malgré tout, été anéantis un par un.

2.7.3. Dans tous ces cas, les auteurs ont donc été cachés et ont bénéficié d'une protection à certains niveaux, et l'impunité s'est donc poursuivie en ce qui concerne les crimes contre l'humanité, qui n'ont même pas été considérés comme tels par l'État colombien.

2.7.4. Cela suffit à démontrer, dans un premier temps, que l'État avait la connaissance et la volonté de parvenir à ce résultat.

2.7.5. Qu'il y a eu clairement des politiques d'extermination du début à la fin.

2.7.6. Que des mesures ont été prises pour parvenir à ce résultat et que rien n'a été fait par l'État lui-même pour empêcher le génocide de chacun de ces groupes.

2.7.8. S'il est vrai que des condamnations judiciaires ont été prononcées à l'encontre de S.A. Veloza García sur la question de la participation à l'extermination de l'UP, dans lesquelles les magistrats affirment qu'il existe une circonstance particulière pour les victimes : faisant partie du mouvement syndical et du parti UP à assassiner, il n'y a pas d'enquêtes sur tous les auteurs de ce génocide, ni sur la responsabilité de l'État.

2.7.9. En nous référant aux cas mentionnés au point deux du document principal, nous pouvons affirmer que les politiques de génocide ont été évidentes et ininterrompues **DEPUIS 1924**¹².

2.7.10. Nombreux sont les phénomènes qui se manifestent dans ce génocide et qui permettent de transversaliser le crime.

2.7.11. Il existe donc un facteur commun : la considération d'appartenance à un groupe ou à une idéologie. L'étiquetage est donc caractéristique de ce phénomène social de persécution et d'extermination.

2.7.12. De nombreux phénomènes sociaux ont été niés et n'ont pas voulu être reconnus par l'État, ce qui a un impact sur le refus d'enquêter.

¹² *Mouvement Gaitaniste 19, Parti communiste, Unión Patriótica, FARC, A luchar, M-19, Marcha Patriótica, Frente Popular, UNO, Colombia Humana, CUT, USO, SINALTRAINAL, Universidad del Atlántico, Universidad de Antioquia, Indigenas, Afro-descendants, Campesinado, Movimiento Cívico del Oriente Antioqueño, Comunidades Eclesiales de Base, Masacre de las Bananeras y Santa Bárbara, Repúblicas Independientes, San José de Apartadó, Movimiento Nacional Carcelario.*

2.8. La connaissance, l'intention et la volonté.

Les preuves qui seront présentées et exposées lors de la mise en place de ce Tribunal démontreront que chacun de ces faits est documenté.

La persécution est historique. De même, de nombreuses enquêtes ont permis d'obtenir pour le moins, des déclarations ou des éléments qui la prouvent, et qu'une des causes fondamentales dans tous ces cas, l'idéologie, se trouve être le facteur de persécution et d'extermination.

Cependant, l'impunité a régné.

Dans nombre de ces cas, l'État s'est allié à des acteurs tels que les paramilitaires pour exécuter ces politiques.

Dans beaucoup d'autres cas, il a utilisé des appareils de pouvoir organisés (institutions) pour les exécuter.

les dirigeants eux-mêmes, de ces forces paramilitaires ont avoué avoir perpétré des assassinats, des déplacements, des tortures, des attaques et des menaces.

la position de garant oblige l'État à : prévenir, éviter, révoquer et mettre en œuvre des mesures de sauvetage, qui n'ont jamais été activées par l'État malgré une connaissance préalable.

2.9. Preuves.

Des preuves documentaires sont proposées comme éléments partiellement cités dans ce mémoire par diverses personnes et par les organisations participant à ce Tribunal. De même, les rapports sur le fond et le jugement de la CIDH :

- Rapport de Fond 170 - 2017
- Sentence du cas Isata Uribe et autres contre Colombie en date du 20 avril 2018.

2.10. Demande.

Pour toutes ces raisons, nous demandons que les faits susmentionnés fassent l'objet d'une enquête et d'un procès et qu'une sanction soit décidée sur la base des principes internationaux qui permettront la pleine restitution des droits des victimes, qui ont été historiquement bafoués : dans le passé, dans le présent et dans l'avenir, et qu'un précédent fondamental soit créé afin que l'État Colombien prenne conscience

de ces modes d'extermination et adopte des mesures pour empêcher leur poursuite et réhabiliter pleinement les victimes.

Les Procureurs Tribunal Permanent des Peuples.

I. Velásquez
IVÁN VELÁSQUEZ

Ángela María Buitrago Ruiz
ÁNGELA MARÍA BUITRAGO RUIZ